

El funeral de Aramburu (1970): entre el duelo y la exclusión

Aramburu's funeral (1970): between mourning and exclusion

Ezequiel Warmkraut

 <https://orcid.org/0009-0003-1863-6103>

Universidad de Tres de Febrero
Departamento de Historia
Caseros, Argentina

 warmkraut52839@estudiantes.untref.edu.ar

Resumen

Este artículo analiza el funeral de Estado al ex presidente y general Pedro Aramburu (1970), como un dispositivo de legitimación política y exclusión simbólica propuesto por el gobierno militar. A partir del análisis de fuentes periodísticas, se examina cómo se construyó su figura como mártir y se reforzó la jerarquía moral militar. Se concluye que el funeral no sólo honró su memoria, sino que también consolidó la identidad castrense, justificando la represión en un contexto de crisis política.

Palabras clave: Aramburu; funeral; exclusión; militar.

Abstract

This paper analyses the state funeral of former President General Pedro Aramburu (1970) as a device of political legitimation and symbolic exclusion proposed by the military government. Based on the analysis of journalistic sources, it examines how his figure as a martyr was constructed and the military moral hierarchy was reinforced. It concludes that the funeral not only honoured his memory, but also consolidated the military identity, justifying repression in a context of political crisis.

Keywords: Aramburu; funeral; exclusion; military.

Introducción

El presente artículo se propone analizar el funeral que el gobierno militar ofició al teniente general Pedro Eugenio Aramburu, entre el 17 y 18 de julio de 1970, luego que fuera secuestrado y asesinado por la guerrilla peronista Montoneros, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970). El secuestro y posterior asesinato de Aramburu “es un hecho excepcional” en la historia argentina reciente (Sarlo, 2003, p. 136), signado por una fuerte carga

moral, emocional y simbólica que impactó en los contemporáneos. Esta *excepcionalidad* motivó a los militares a realizarle a Aramburu un ritual funerario particular, para rendirle al ex presidente de facto los honores correspondientes y así elevarlo a mártir de la Patria. Sin embargo, a pesar de lo disruptivo del hecho, la muerte de Aramburu y su posterior funeral suelen ser temas de investigación eclipsados por estudios que enfatizan el surgimiento de la guerrilla peronista (Gillespie, 1987; Anzorena, 1998; Salas, 2005; Larraquy, 2010; Otero, 2019). Es decir, la figura de Aramburu queda subsumida a un marco historiográfico e ideológico general, enmarcada en la violencia política en Argentina. Este trabajo, por el contrario, busca correrse de esa mirada y explorar cómo el Estado militar construyó la figura de Aramburu como mártir, utilizando su muerte no sólo para condenar a sus enemigos, sino también para reforzar su propia legitimidad en un contexto de crisis. Así como el asesinato de Aramburu se constituyó en el *mito fundacional* del grupo Montoneros (Sarlo, 2003, p. 138), también fundó en los militares una revitalizada conciencia política.

Los funerales de Estado son un tipo de ceremonia pública, en donde se honran los restos mortales de una persona ilustre. La historia de los funerales de Estado en Argentina se remonta a la época de la independencia, cuando se realizaron las primeras honras fúnebres a los próceres de la Patria¹. Por su valor simbólico dentro del imaginario nacional, este tipo de ceremonias expresan jerarquías sociales, políticas y religiosas, cargadas de un sentido moral. Para el historiador israelí Avner Ben Amos (2000), quien estudió los funerales de la Francia del siglo XIX, un funeral de Estado es una ceremonia de poder que se constituye en parte integral de cualquier régimen político. Desde su perspectiva, tanto el duelo público como la “apoteosis” de una persona ilustre fallecida, tienen la capacidad de eliminar los conflictos y reunir en comunidad la ciudadanía. Esto, según Ben Amos, se logra mediante dos mecanismos: la “integración” de la comunidad de dolientes y la “exclusión” de otros que no pertenecen a dicha comunidad (p. 29.). Dicha comunidad es entendida como la asociación ritual de personas en torno a la muerte de uno de sus integrantes. Para alcanzar dicha integración social, los medios de comunicación construyen una narrativa hegemónica sobre el mártir, incidiendo en la opinión pública (Sanz, 2006, pp. 128-129). Esta construcción, no obstante, genera un campo de disputas, entre los diversos actores sociales que interactúan durante el ritual. En el caso de Aramburu, se analizarán tres niveles de exclusión: el moral, el político y el discursivo.

Por otra parte, el antropólogo Santiago Garaño junto al historiador Esteban Pontoriero (2018), entienden que los funerales que el gobierno militar realizó a sus “caídos” entre 1973 y 1974, fueron parte de una “estrategia de poder” llevada a cabo por el régimen militar, para demostrar públicamente su poder,

¹ En la historiografía argentina se destacan los trabajos de la historiadora Sandra Gayol (2012; 2014; 2018), quien analizó los funerales de Estado en la Argentina del siglo XX.

reivindicando sus propios valores y principios corporativos, por medio del culto a sus mártires (pp. 12-14). Estos autores concuerdan que estos funerales “fueron rituales fundacionales [creados] para producir activamente un consenso central en función de llevar adelante la represión política” (p. 20). Por su parte las investigadoras Schenquer y Cañada (2020), analizan los homenajes que el último gobierno militar ofició a sus caídos entre 1976 y 1983. Sobre la base de los aportes de la socióloga Elizabeth Jelin, Schenquer y Cañada sostienen que, por medio de los funerales de Estado, la dictadura militar intentó “imponer su versión de ese pasado como hegemónica, legítima, ‘oficial’, normal o parte del sentido común aceptado por todos” (Jelin, 2008, citado por Schenquer y Cañada, 2020, p.4). Fue mediante este mecanismo, que el gobierno de facto elevó, entre 1976 y 1983, a Aramburu al rango de mártir de la Patria (pp. 7-8).

Se asume que el general Pedro Eugenio Aramburu es una figura controvertida en la historia argentina reciente, el presente trabajo se propone analizar la capacidad que tiene un gobierno para legitimar su poder a través de un ritual fúnebre. En el caso del funeral de Aramburu esto es relevante, dado el rechazo que generaba su figura tanto en el ala nacionalista del Ejército como en partidarios del Peronismo. Para ello, este artículo parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el funeral de Estado de Pedro Eugenio Aramburu contribuyó a la construcción de legitimidad política de las Fuerzas Armadas (FFAA) en 1970? Para responder dicha pregunta y analizar la *hegemonía narrativa* durante el funeral, se analizarán principalmente los periódicos *La Prensa* y *La Razón*, los cuales cubrieron ampliamente el evento, y las revistas *Periscopio* y *Panorama*. Este artículo plantea la hipótesis que el funeral buscó instalar a Aramburu como un mártir nacional, reforzando el espíritu de cuerpo del Ejército frente a la sociedad argentina. En lo siguiente, el *martirologio* se entenderá como una operación política y ritual que convierte al muerto en emblema colectivo, fortaleciendo identidades corporativas por medio de un duelo público.

Un general liberal

Pedro Eugenio Aramburu nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 21 de marzo de 1903, hijo de inmigrantes vascos. Fue el primer miembro de su familia que ingresó al Colegio Militar, a la edad de 15 años, haciendo una prominente carrera en las armas. En 1930, durante el gobierno de facto del general José Félix Uriburu, Aramburu fue enviado a Santiago del Estero como interventor de la municipalidad de Añatuya, asignándolo jefe político del departamento 1° de Mayo, y luego a la comuna de Estación Lavalle, del departamento de Guasayán, con el mismo cargo. Posteriormente fue enviado como agregado militar a Europa. A su regreso en 1939, Aramburu fue ascendido a mayor del Ejército y en 1943 fue nombrado profesor permanente de la Escuela Superior de Guerra. En 1951 Aramburu logró el grado de General de Brigada, asumiendo tiempo después como Director General de Sanidad del

Ejército. Luego, en 1954, el Ejército ascendió a Aramburu a General de División, segundo grado superior dentro de la estructura castrense, lo que le permitió participar en los asuntos de Estado y alcanzar mayor experticia en la toma de decisiones. Un año después, fue designado Jefe del Estado Mayor conjunto, teniendo un rol destacado en la planificación del golpe de Estado al presidente constitucional Juan Perón, cuyo gobierno fue tildado de autoritario por sus opositores.

El 16 de septiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi, militar que representaba la tendencia nacionalista y católica dentro de las FFAA, derrocó al gobierno de Juan Perón, liderando una fuerza heterogénea compuesta por nacionalistas católicos, liberales, socialistas y radicales, entre otros. El objetivo de este golpe de Estado era liberar al país de la “tiranía” peronista y restaurar el orden democrático, por lo que se adoptó el nombre de “revolución libertadora”. Dentro de ella se constituyeron dos grupos: quienes que apelaban a la “unidad nacional” y aquellos que buscaban corregir el sistema político corrompido por el peronismo (Spinelli, 2005, pp. 187-188). En esta línea, Lonardi entendía que era necesario recuperar la estabilidad política del país y no prolongar su crisis, ya que aquello podría generar un conflicto civil. Para ello era imprescindible respetar el electorado peronista. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1955, Pedro Aramburu junto al vicealmirante Isaac Rojas, derrocó a Lonardi en un golpe palaciego, instaurando un gobierno de corte liberal que persiguió ferozmente al peronismo. Su gobierno se caracterizó por una férrea persecución política, con el objetivo de desperonizar a la sociedad argentina (Spinelli, 2005). Además de la represión, se decretaron normas y leyes con las que se pretendió disolver el Partido Peronista, prohibiendo su reorganización política, la propaganda partidista y la difusión de su doctrina.

El gobierno de Aramburu se caracterizó por tres hechos que impactaron en la memoria de la militancia peronista. El primero fue el fusilamiento del general Juan José Valle, quien se había alzado contra el gobierno de facto de Aramburu en 1956. El segundo fue el fusilamiento de militantes peronistas en la localidad bonaerense de José León Suarez (Partido de San Martín). El tercero, sin embargo, impactó fuertemente en la memoria peronista: el secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón en 1955, en un operativo comandado por el teniente coronel Carlos Moori Köenig. Estos incidentes signaron la reputación de Aramburu, cuyo gobierno fue denominado por los peronistas como la “revolución fusiladora”, por el grado de cinismo y crueldad que la caracterizó. En referencia a su gobierno, Aramburu dijo el 7 de enero de 1956: “La Revolución Libertadora carece de dueño y no admite herederos”². Tras finalizar su mandato presidencial en 1958, Aramburu llamó nuevamente a elecciones, manteniendo la proscripción del peronismo. En dichas elecciones triunfó el radical Arturo Frondizi, quien otorgó a Aramburu

² Diario *La Razón* (LR), 17-07-1970, p. 17.

y a Rojas los grados militares de teniente general y almirante, respectivamente³.

En 1962 Aramburu creó el partido Unión del Pueblo Argentino (UdelPA), para competir en las elecciones nacionales y enfrentar a los radicales, principal fuerza opositora después del peronismo. Cuatro años después el partido fue disuelto, cuando Juan Carlos Onganía asestó un golpe militar que derrocó al presidente constitucional, el radical Arturo Illia. En 1969, Aramburu regresó a la escena pública proponiendo una salida política a la dictadura de Onganía, proponiendo tres principios: argentinizar el país para erradicar el colonialismo, promover el desarrollo y “conquistar una democracia efectiva con la incorporación de todos los estratos sociales a la vida política para que sea el pueblo el que tenga en sus manos su propio destino”⁴. Con el objetivo de alcanzar el gobierno en forma democrática, Aramburu estuvo dispuesto a terminar con la proscripción del peronismo, una decisión que generó tensiones en el amplio espectro político argentino. En este aspecto, Aramburu realizó, los meses previos a su muerte, una limpieza de su imagen pública, desvinculándose de su otrora imagen de líder antiperonista⁵. Ese fue el contexto en el que se inscribe, en forma general, la figura de Aramburu en la historia argentina.

El secuestro y muerte de Aramburu

Juan Carlos Onganía gobernaba la Argentina desde 1966 bajo un régimen denominado Revolución Argentina, caracterizado por un nacionalismo católico de corte corporativista, militarista y antipopular. Onganía realizó un proceso de “modernización autoritaria” del país, con el objetivo de erradicar al comunismo y al peronismo, y extranjerizar la economía (Míguez, 2013, p. 66). Esta situación conllevó una crisis social en 1969, que devino en estallidos en las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán⁶. Estas rebeliones populares, motivadas por reivindicaciones sociales y sindicales, amenazaron la estabilidad del gobierno militar. Por otra parte, dichas revueltas fueron alentadas y capitalizadas principalmente por los sectores peronistas y comunistas, dirigidos por Elpidio Torres, Hipólito López y Agustín Tosco respectivamente. En 1969 fue asesinado el sindicalista metalúrgico Augusto Vandor, agudizando aún más la crisis nacional. Ese mismo año, Aramburu reconoció en una entrevista:

³ En junio de 1958, el Poder Legislativo de la Nación decidió promover a Pedro Aramburu al grado de teniente general y a Isaac Rojas como almirante. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197849/norma.htm>

⁴ Revista *Panorama* (RP), 28-04-1969, p. 17.

⁵ RP, 2 al 8 de junio de 1970, p. 11.

⁶ Estas revueltas estuvieron motivadas por el congelamiento de salarios y la suspensión de negociaciones gremiales (ver Gordillo, 2019).

Debemos hacer una democracia real sobre la base del respeto de los derechos cívicos y sociales de todos los argentinos. Significamos claramente que una democracia estable exige terminar para siempre con las proscripciones⁷.

Onganía se encontraba en una compleja situación, ya que necesitaba sostener la legitimidad de su gobierno ante la opinión pública. Para lograr un acuerdo político con el sector liberal de las FFAA, Onganía realizó cambios en su gabinete ministerial (Gomes & Seitz, 2019, p. 70). El sector liberal dentro de las FFAA estaba representado por el general Alejandro Lanusse⁸, quien buscaba una salida electoral ante el descontento social y violencia generalizada (Anzorena, 1998, p. 63). Por entonces, el país estaba sumido en el caos político, con la proliferación de grupos armados⁹ y la fractura interna dentro de las FFAA, en particular entre el ala nacionalista y el ala liberal. En 1970 ninguno de los grupos, tanto civiles como militares, pudo sostener su hegemonía a no ser por la violencia y una retórica belicista. Además, dentro de la Iglesia Católica, también había una fuerte tensión ideológica. Por un lado, el cardenal Antonio Caggiano, quien buscaba el acercamiento entre la Iglesia y el gobierno de Onganía, y por otro lado los Curas del Tercer Mundo, quienes denunciaban los abusos de la dictadura, apoyando y simpatizando con el ideario de los grupos subversivos, en particular aquellos afines al peronismo. Además, en 1970, esta situación de inestabilidad se agravó tras el secuestro del cónsul paraguayo Joaquín Waldemar Sánchez y el intento de secuestro del diplomático soviético Yuri Bivarov en 1970. Este clima de tensión caracterizaba la escena política nacional.

El día 29 de mayo de 1970 cuatro personas pertenecientes a una organización armada autodenominada Montoneros, llegaron en dos vehículos al domicilio de Aramburu, en Capital Federal, con el propósito de secuestrarlo. Este operativo, denominado Pindapoy, fue planificado en 1969 mientras el gobierno del general Juan Carlos Onganía enfrentaba la crisis socio-económica¹⁰. La falta de custodia permanente fue aprovechada por Montoneros para ingresar sin problemas al edificio donde Aramburu vivía junto a su familia. Fernando Abal Medina y Emilio Maza, vestidos de uniforme militar, se presentaron ante Aramburu y su esposa, Sara Herrera, ofreciéndole al general sus servicios de protección. Luego que esta se retirara del inmueble, Abal Medina y Maza persuadieron al ex presidente de facto a

⁷ RP, 28-04-1969, p. 17.

⁸ El general Alejandro Lanusse participó en la intentona golpista contra el ex presidente Juan Perón en 1951 y también sirvió como jefe del Regimiento de Granaderos, cuando Aramburu era presidente provisional (1955-1958).

⁹ Entre 1969 y 1970, en Argentina actuaban en paralelo varias organizaciones guerrilleras, entre ellas el Frente Argentino de Liberación, la Vanguardia Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Socialismo Revolucionario.

¹⁰ Según Mario Firmenich, el operativo fue planificado a comienzos de 1969 (*La causa peronista*, 3-09-1974, p. 26).

retirarse del departamento con ellos, para luego llevárselo en un vehículo, dando así inicio al secuestro.

En ese entonces, Aramburu se había convertido en un posible blanco de ataques de grupos nacionalistas, que veían con temor la instauración de un régimen “cuasi-liberal” (Gillespie, 1987, p. 122). Los familiares, amigos y seguidores de Aramburu sospechaban que el gobierno de Onganía era el autor ideológico del secuestro y posterior asesinato del ex mandatario, sugiriendo que quien cometió dicho crimen “obró para detener la revolución que Aramburu proyectaba asestar a Onganía”¹¹. En este aspecto, según Prospero Fernández Alvaríño (1974), lugarteniente del ex presidente provisional, éste no contaba con custodia policial desde hacía días, hecho que alimentó las sospechas hacia el gobierno. De hecho, fueron Fernández Alvaríño y el capitán Aldo Molinari quienes hicieron circular la hipótesis que el grupo de secuestradores realizó el operativo con la anuencia de Onganía. La tesis del complot hizo eco mediático, aunque no logró sostenerse en el tiempo. Por entonces también circuló la hipótesis que Aramburu había realizado un autosecuestro para debilitar al régimen de Onganía, una teoría sostenida por algunos círculos castrenses cercanos al gobierno. Esto sumaba un cuadro político complejo, en donde todos los actores políticos podían, por acción u instigación, ser responsables del crimen. Por ese motivo, los familiares, amigos y seguidores de Aramburu entendieron que no podían confiar en nadie.

El 31 de mayo de 1970 la organización armada ofreció un nuevo comunicado, dando a conocer que el ex presidente provisional sería juzgado por un Tribunal Revolucionario. Allí la organización Montoneros declaró a Aramburu culpable de haber ordenado el asesinato de militantes peronistas en José León Suárez, condenado a muerte ocho militares, haber encabezado la represión y proscripción del peronismo y el haber profanado el recinto de la CGT secuestrando y haciendo desaparecer el cadáver embalsamado de Eva Perón. Luego Montoneros resolvió condenar a muerte a Aramburu y darle “cristiana sepultura”¹², sin dar mayores detalles y especificaciones al respecto. Desde la perspectiva de Montoneros, la ejecución había sido un acto de “justicia revolucionaria”, destinada a restituir al pueblo la dignidad perdida en 1955. El concepto de justicia revolucionaria, basada en un principio de “justicia popular” de carácter moral, fue lo que legitimó el accionar de la guerrilla (Lenci, 2021, p. 407). Para el historiador Pablo Reynoso (2013), en el ideario revolucionario de Montoneros, la “justicia” tenía una base moral religiosa que dio sentido a todo el accionar guerrillero (p. 5). Para Sarlo, por el contrario, el asesinato de Aramburu era un “hecho pasional,

¹¹ *RP*, 3-08-1970, p. 11

¹² *Montoneros*. Comunicado n°3, 31-05-1970. https://cedema.org/digital_items/229

organizado simbólicamente sobre el eje de una pasión clásica, la de la venganza” (p. 136).

En contrapartida, los seguidores de Aramburu enfrentaron el dilema de cómo debían actuar ante el crimen: ¿venganza o justicia? La primera posición era sostenida por el general Federico Toranzo, quien advirtió a los secuestradores que, de no liberar a Aramburu, “devolveremos en las personas de los dirigentes del totalitarismo, de izquierda o de derecha, todo posible daño que se le pretendiera infligir”¹³. La otra posición era sostenida por el coronel Aldo Molinari, quien en respuesta a Toranzo dijo: “no se puede hablar de represalias. Lo único que tenemos nosotros es la ley y la ley es la Constitución”¹⁴. Ambas posiciones fueron los pilares sobre los que se construyó el martirologio de Aramburu, resignificándolo como una víctima legítima. En este aspecto, el pedido de justicia es una operación discursiva, que, traducida en el plano ritual, permitió a los seguidores de Aramburu reclamar reparación, cohesión y autoridad desde una posición moral. De este modo, el martirologio no solo configuró una gramática del sacrificio, sino que también instituyó un dispositivo de poder simbólico que moldeó memorias colectivas y acciones políticas.

Luego de ajusticiar al ex presidente de facto, Montoneros notificó en un comunicado fechado el 15 de junio de 1970, que los objetos personales de Aramburu (una medalla, un reloj y dos bolígrafos) estarían resguardados en un lugar seguro para ser devueltos a su familia. Además, el comunicado decía que el cadáver de Aramburu sería devuelto luego que fueran restituidos a la Argentina los restos de Eva Perón¹⁵. En cambio, su prendedor con la insignia militar y la alianza matrimonial con las iniciales S.H a E.A (Sara Herrera a Eugenio Aramburu), fueron enterradas junto al cadáver del ex presidente de facto. Pese al valor simbólico y económico de ambas piezas, que podrían haber sido sustraídas, reducidas o convertidas en trofeos de guerra, Montoneros optó por dejarlas junto al cuerpo de Aramburu, donde se convirtieron en su ajuar funerario. Es probable, también, que el grupo armado dejará estos objetos para que el cuerpo pueda ser identificado, luego de producirse el intercambio con el cuerpo de Eva Perón. En ese marco, aunque Aramburu no tenía para la organización un valor afectivo ni ideológico, su cadáver adquirió un valor estratégico, ya que solo un cuerpo investido de peso simbólico podía operar como contraparte frente a la figura de Eva Perón. Por cincuenta días, el ex presidente estuvo desaparecido, sin rastros de su paradero, aumentando la ansiedad pública, la angustia familiar y la impaciencia de los militares. Esta situación, sumada a la crisis social, llevó a

¹³ Revista *Periscopio* (Pe), n° 38, 9-06-1970, p. 16.

¹⁴ Pe, n° 38, 9-06-1970, p. 16.

¹⁵ Montoneros. Comunicado n°5, 15-06-1970. https://cedema.org/digital_items/231

la Junta de Comandantes a desplazar a Juan Carlos Onganía y reemplazarlo por Roberto Levingston, el 8 de junio de 1970.

El cadáver de Aramburu

Las fuerzas policiales realizaron una infructuosa búsqueda para localizar al general Aramburu, sin lograr resultados positivos. Tras el asalto a la ciudad de La Calera (Córdoba) perpetrado por Montoneros el 1 de julio de 1970, la policía logró detener a varios guerrilleros, entre ellos a Carlos Maguid. La detención y confesión de este último permitió a las fuerzas de seguridad llegar a la chacra La Celma, en el pueblo de Timote (Buenos Aires), en donde estaba oculto el cadáver de Aramburu, enterrado en el sótano de una casona. La policía provincial fue la encargada de exhumar el cuerpo a la vista de tres testigos: el posadero José Zurdo, el almacenero Hipólito Paterno y Blas Acebal quien era el cuidador de dicha propiedad. Los testigos descendieron al sótano de la casona, aunque luego solicitaron irse de allí debido al fuerte hedor a descomposición. En el lugar se presentaron el jefe de la Policía Federal, el general Jorge Cáceres Monié (quien reemplazó en funciones al general Mario Fonseca) y el jefe de la Policía de Buenos Aires, el coronel Antonio Navas. Junto a las fuerzas policiales estuvo presente el médico cirujano Julio Ruiz, encargado del cuerpo forense. En cuanto al estado del cadáver, según la revista *Panorama*, éste se hallaba: “En el fondo del pozo, tapado con tierra y cal, apareció un cadáver, piel y huesos, con el pelo totalmente calcinado, maniatado por la espalda, los ojos cubiertos por una venda, la boca con una mordaza”¹⁶.

El cadáver estaba maniatado, con los ojos vendados y la boca cubierta, además de presentar un golpe en la zona parietal-occipital. También mostraba quemaduras post-mortem, lo que indica que los asesinos intentaron incinerarlo. El modo en que Montoneros trató el cuerpo de Aramburu sugiere que, aunque fue concebido como un posible objeto de negociación, operó sobre él una lógica de revancha y castigo. Fue así que, ante la imposibilidad de destruirlo, los captores decidieron sepultarlo bajo una capa de cal, suponiendo que ello aceleraría la descomposición. Sin embargo, el efecto fue el contrario: la cal provocó la desecación de los tejidos y la preservación de los huesos, lo que finalmente permitió la identificación del cadáver. Estas marcas afectaron la corporeidad de Aramburu, reflejando la deshumanización que sufrió tras su muerte. Esta deshumanización borró los atributos de persona, desacralizando su humanidad y arrebatándole su dignidad¹⁷. Además, el destrato que recibió el cuerpo por parte de Montoneros tuvo como efecto desmoralizar a las fuerzas militares y a la propia familia Aramburu. En este aspecto, el proceso de deshumanización del

¹⁶ *RP*, 27-07-1970, p. 8.

¹⁷ La *desacralización* se refiere al despojo del carácter inalienable y sagrado que inviste a la persona humana, reduciendo su existencia a una entidad puramente material y profana.

enemigo implica en cierta medida su “demonización”, una forma política y moral que asimila al enemigo a la figura del “demonio” (Bello Reguera, 2008, p. 12). Contra ese enemigo maligno se declara una cruzada moral, para combatir su maldad y restituir la justicia divina.

Desde esta perspectiva, para Montoneros, Aramburu era un ser inhumano que había ordenado la ejecución de militantes peronistas y el secuestro del cadáver de Eva Perón en 1955, considerada una santa por la organización guerrillera. Por ello, según esta lógica, el cuerpo de Aramburu debía recibir un tratamiento inversamente proporcional, al sepultarlo en un enterramiento clandestino y anónimo, en un intento de cosificar sus restos. Así, a pesar que en su comunicado la organización guerrillera prometió darle “cristiana sepultura”¹⁸, utilizando una estrategia discursiva para legitimarse, el cadáver no recibió un tratamiento digno, perpetuando su castigo moral.

Las primeras pericias forenses realizadas en el lugar, a cargo del cirujano Julio Ruiz, indicaron que el cadáver tenía un orificio de bala a la altura del corazón, a modo de ejecución. Aunque dicha la pericia no fue homologada por los médicos personales de Aramburu, trascendió la noticia que el cadáver presentaba un tiro en la cabeza y una puñalada en el pecho¹⁹. Luego se supo que fueron tres disparos a quemarropa. Alberto González, un amigo del general Aramburu, quien se desempeñó como dirigente y candidato de UDELPA, fue llamado por las autoridades a reconocer el cadáver. En su testimonio dijo:

Quando me llamaron a reconocer el cadáver, me costó mucho acercarme. Estaba tapado con una manta y solamente le descubrieron la cabeza y el pecho. Estaba bastante descompuesto y tenía puesto el traje completo. Tenía la nariz un poco aplastada, como si estuviera cortada. Pero ese detalle me pareció propio del tiempo que estuvo enterrado²⁰.

El 17 de julio de 1970 los restos del ex presidente provisional fueron llevados al Regimiento de Granaderos a Caballo, en donde se realizó la autopsia. Dada la naturaleza política y sensible del caso, la elección de una dependencia militar para realizar las pericias permitió al gobierno militar mantener el control de la información. El hermetismo impuesto por los militares fue tal que el grupo de cronistas allí apostado no sabía si efectivamente el cuerpo de Aramburu estaba en el regimiento o en el Hospital Militar cercano. Tampoco lo supo el juez de la causa, el señor Raúl de los Santos, quien fue notificado por el director del hospital, el coronel médico José María Gómez Villafañe, que el cuerpo de Aramburu estaba en la guarnición militar. Entre tanto, las pericias fueron realizadas por el Gabinete Scopométrico a cargo del comisario inspector Agustín Lafont, jefe de la división técnica de la Dirección

¹⁸ Montoneros. Comunicado n°4, 10-07-1970, https://cedema.org/digital_items/230

¹⁹ RP, 27-07-1970, p. 9.

²⁰ LR, 17-07-1970, p. 15.

de Investigaciones de la Policía Federal, quien procedió a su identificación. Para ello se tuvo en cuenta los objetos personales encontrados en la escena del crimen, marcas en el cuerpo y cualquier otra característica física, a pesar del deterioro del cuerpo. El comisario Héctor del Campo y el principal José Dorrego realizaron las pericias dactilares. Posteriormente el médico forense Walter Saborido, quien por entonces era el decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y director de la morgue judicial, arribó al lugar para supervisar el procedimiento legal, junto al doctor Piacentino. Según el dictamen forense, causa 145/75:

La camisa presenta un orificio en la parte anterior izquierda con restos de deflagración de pólvora, habiéndose efectuado el disparo a muy corta distancia, no más de 20 centímetros, infiriéndose que la trayectoria del proyectil ha sido de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y en forma descendente (Méndez, 1984, citado por Salas, 2005, p. 65).

También fue convocado el odontólogo forense Julio Vaccarezza, quien al respecto dijo:

Según la información que yo tengo, una impresión digital y la ficha bucal habrían sido los datos incontrovertibles que posibilitaron la identificación, ya que el estado de descomposición hizo imposible el reconocimiento por la figura²¹.

Luego de haber sido peritado, el cadáver fue transportado en una ambulancia militar y escoltado por motocicletas de la Policía Federal rumbo a la capilla de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, en Capital Federal, donde fue velado. Dentro de la ambulancia viajaban Eugenio Aramburu, al general Bernardino Labayrú, quien fue secretario de Aramburu en 1955, y al capitán Aldo Molinari, quien se desempeñó como subjefe de la Policía Federal durante la “revolución libertadora”. Detrás de ellos, en un segundo vehículo, iban el general Jorge Cáceres Monié, Carlos Aramburu, el coronel Montiel Forzano y el doctor Tallarico, mientras que en un tercer vehículo iba la familia Aramburu. Estos conformaron el núcleo de “dolientes”, interesados en esclarecer el crimen mientras el funeral se desarrollaba.

Cómo enlutar a un país

El 17 de julio de 1970, luego que las fuerzas policíacas encontraran el cuerpo de Aramburu en la estancia La Celma, el gobierno nacional estableció un protocolo ceremonial fúnebre para la ocasión²². Este estaba compuesto por diez artículos, en donde se expresó que al teniente general Pedro Aramburu debían tributársele los honores civiles y militares correspondientes a un presidente de la Nación muerto en ejercicio del cargo. Esta designación honorífica guarda un sentido político en los funerales de Estado en la

²¹ Diario *La Prensa* (LP), 18-07-1970, p. 7.

²² LP, 18-07-1970, p. 10.

Argentina, ya que el presidente de la Nación representa la unidad nacional y la concentración del poder público. Es decir que, al menos en los rituales funerarios, la investidura presidencial es un emblema de poder simbólico con el cual se empodera a una figura pública. Este representa la soberanía política e integridad moral del país, con capacidad de sostener el orden jurídico, social y simbólico de una Nación. De este modo, como sostiene Gayol (2012), se buscaba ofrecer al muerto “como albergue de la nación y del orden” (p. 5), para fusionarlo simbólicamente y ritualmente al imaginario nacional.

El protocolo establecía que la bandera nacional debía estar a medio izar en cada edificio público por diez días, haciendo referencia a la “unidad nacional” en luto. El sepelio sería oficiado en la capilla del Corazón Eucarístico de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, a pedido de la familia del difunto. En representación del Poder Ejecutivo, de la Junta de Comandantes y de las FFAA, el general Lanusse sería el principal orador durante la inhumación del cadáver en el cementerio de La Recoleta, lugar emblemático en donde se sepultaban las figuras prominentes de la política nacional. Además, Lanusse sería quien coordinaría todo el ritual funerario, desde el velatorio hasta el entierro. Por su parte, el ministro del Interior Eduardo Mc Loughlin, debía disponer lo necesario para que los gobernadores provinciales realizarán sus respectivos homenajes, mientras que Luis María de Pablo Pardo, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, comunicaría el deceso a las delegaciones diplomáticas y a las autoridades eclesiásticas. También debía invitarse a los representantes de cada una de las fuerzas militares (Ejército, Armada y Aeronáutica)²³. Si bien el protocolo apelaba a los valores nacionales, no se hizo mención a los rituales públicos ni al lugar que ocuparía la sociedad civil durante las exequias. Esto difiere de otros funerales de Estado donde hubo movilizaciones y concentraciones populares, alentadas y organizadas por el propio Estado y los partidos políticos (Gayol, 2012; 2014). En el caso de Aramburu, por el contrario, se apeló a la libre adhesión de los concurrentes.

El ministro del Interior aclaró que el duelo nacional no afectaría los servicios, reuniones y espectáculos públicos, como tampoco las actividades privadas de industrias y comercios, quedando a disposición de cada una de estas adherirse o no a los homenajes correspondientes²⁴. En este aspecto se mantuvo el protocolo fúnebre tradicional de comienzos de siglo XX, cuando tras fallecer un mandatario en ejercicio de su cargo o un ex mandatario, se invitaba a los negocios a cerrar sí así lo deseaban²⁵. Esto difirió del funeral de Eva Perón (1952), en donde el gobierno peronista impuso el luto nacional,

²³ LR, 17-07-1970, p. 10

²⁴ LP, 18-07-1970, p. 10

²⁵ Los funerales de Estado constituyen un modo de rendir homenaje a las grandes personalidades de la Nación, incluidos los ex mandatarios, como lo demuestran las exequias públicas realizadas a Bartolomé Mitre, Manuel Quintana, Carlos Pellegrini y Miguel Juárez Celman. En estas ocasiones los negocios cerraron sus puertas y se suspendieron los espectáculos públicos. v. Gayol (2012, pp.3, 6)

impidiendo que negocios e instituciones privadas abrieran sus puertas (Gayol, 2018). En el caso de Aramburu, quedaba a criterio de cada institución privada, lo mismo que cada provincia y municipio, adaptar la normativa según sus propios requerimientos. Sin embargo, el general Manuel Iricibar, por entonces intendente de facto de la ciudad de Buenos Aires, invitó a todas las jerarquías civiles y militares bajo su administración a concurrir al sepelio, ordenando que se mantuvieran cerrados el Planetario y el Jardín Zoológico, y la suspensión de las carreras de caballos, los partidos de fútbol, las partidas de ajedrez, las funciones del teatro Colón, los encuentros de rugby y las peleas de boxeo en el Luna Park.

Por su parte, instituciones privadas como la Sociedad Rural Argentina y el Jockey Club, asociadas a la elite liberal-conservadora de la Argentina, también se adhirieron al duelo nacional. El presidente de la Sociedad Rural, el doctor Luis Firpo Miro y su mesa directiva resolvieron asistir al velatorio, mientras que la comisión directiva del Jockey Club invitó a sus socios a acompañar los restos mortales de Aramburu al cementerio de La Recoleta. Otras instituciones, como la Bolsa de Cereales y la Academia Nacional de la Historia también se pronunciaron con profundo pesar al respecto. En este aspecto, como señala el antropólogo francés Louis-Vincent Thomas (1991), el luto público no solo implica la cesación temporal del trabajo y disminución de actividades cotidianas, sino que

(...) designa también el conjunto de actitudes y comportamientos estrictamente impuestos por la colectividad a todos aquellos a quienes por su origen, sus alianzas o su condición les atañe el desaparecido, cualquiera que sea el vínculo afectivo que les unía a él (p. 122).

El protocolo de luto no solo impuso normativas y prácticas de duelo público, sino que también buscó interpelar la conciencia de quienes, por causa emocional o afinidad ideológica, se sintieran identificados con Aramburu. Fue así que, para enlutar al país y aunar el dolor, los militares elevaron al ex presidente a mártir nacional, inaugurando así su martirologio. Para ello establecieron un marco moral en el que inscribir la muerte y funeral de Aramburu, presentando al ex presidente como víctima de un crimen que “ha infringido así una afrenta sin ejemplo a la dignidad de la Nación, al concepto de pueblo civilizado con que se nos distingue en el mundo”²⁶. De ese modo, los militares buscaron generar mayor adhesión popular a su causa, condenando a los magnicidas y sus simpatizantes, excluyéndolos moralmente. Así, aunque los militares no obligaron coactivamente a la ciudadanía a participar del ritual funerario y asistir al ceremonial público, sí apelaron a la autonomía moral, tanto individual como colectiva de los argentinos. Durante el “proceso de enlutamiento”, el diario *La Prensa* insufló noticias sobre las pesquisas policíacas, caracterizando a los responsables de la muerte como “criminales” y “desequilibrados”. De este modo se buscó

²⁶ LP, 18-07-1970, portada

excluir jurídica y moralmente de la sociedad a los responsables del magnicidio, y por extensión a todos aquellos que simpatizaran con el crimen. Esta carga moral diferenció a la sociedad argentina entre quienes adherían ideológica o emocionalmente a Aramburu, y quienes no.

El hecho que el gobierno militar diera libertad de acción y de conciencia a cada institución pública y privada para asistir al sepelio y entierro de Aramburu, es algo que difiere de otros funerales de Estado que se realizaron en la Argentina hasta entonces. Como sostiene la historiadora Gayol (2012), los funerales de Estado en Argentina eran “fiestas cívicas” en donde se invitaba a la ciudadanía a participar activamente y en los que el gobierno inculcaba valores cívicos buscando integrar políticamente a la sociedad (p. 5, p. 12). Eran espacios de concurrencia masiva, en donde se enaltecía la figura de una persona como un héroe o un mártir de la Patria. Mediante dicha operación simbólica se buscaba legitimar un orden social y político, apelando a los valores inmanentes de los argentinos. Sin embargo, el funeral de Aramburu presentó inconvenientes a la cúpula castrense, dada la naturaleza política del fallecido. Todavía un sector de la sociedad argentina identificaba a Aramburu como el responsable del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, instaurando con ello un régimen represivo que proscribió al peronismo y persiguió a sus militantes. Este sector de la ciudadanía, identificado con el ideal peronista, quedó (auto) excluido del ritual, ya que consideraban que el asesinato de Aramburu era un acto de “verdadera justicia, la que nace de la voluntad del pueblo”²⁷.

Frente a ese enemigo, las FFAA inscribieron la muerte de Aramburu en una retórica de guerra y no como un hecho aislado. Sin embargo, Aramburu no tenía las credenciales de héroe, ya que no había participado en ninguna batalla, ni demostrado coraje, hidalguía y valentía en combate, atributos que se le atribuyen a un héroe militar. Su elevación como mártir fue un proceso de resignificación simbólica y apropiación ritual por parte de sus seguidores. Para ello, Aramburu fue presentado como un ciudadano más, alguien quien por fuera de toda pertenencia institucional había entregado su vida al país. Esto les permitió a sus seguidores legitimarse corporativamente frente a la sociedad. En este aspecto, para enaltecer la figura moral de Aramburu y despegarlo de su imagen negativa, fue importante el rol de los medios de comunicación. La nota editorial del diario *La Prensa* describe al ex presidente como un mártir, un hombre sereno, honesto, respetuoso y ajustado al derecho, de afanoso trato y modesta honradez. Es decir, un inocente, alguien que no merecía morir. La editorial finaliza con una loa al difunto:

Él continuará viviendo aureolado por la más dolorosa pero también la más duradera de las glorias: la que acompaña, como una acusación, a la

²⁷ Revista *La Causa Peronista (CP)*, 2-09-1974, p. 25.

memoria de los mártires de su deber, sacrificados por el odio selvático, baldón de los pueblos adormecidos²⁸.

Este registro representa al martirio como un deber sagrado de todo argentino, impuesto por el devenir histórico nacional, a la civilización enfrentada a la barbarie y al “odio selvático” de la sinrazón. Se produce así glorificación del héroe y la “alterización” del adversario político, atribuyéndole características infrahumanas y apátridas, buscando desvalorizarlo como humano y ciudadano. En este aspecto, el comunicado oficial expresa

Visto y considerando: que en el día de hoy ha quedado trágicamente confirmado que el ex presidente provisional de la Nación, teniente general don Pedro Eugenio Aramburu, ha muerto como consecuencia de la violencia de quienes persiguen destruir la unión nacional; que en los distintos momentos en que la Nación se lo requirió, el teniente general Aramburu supo poner lealmente su empeño de argentino, de soldado y de político al servicio del país; que este asesinato coloca para siempre su nombre en la insigne lista de quienes ofrendaron su vida en holocausto de la Patria; que por todo ello su memoria no solo es acreedora a la emocionada consideración de sus conciudadanos sino también a los honores debidos a las víctimas de una causa común a todos los argentinos: la unión nacional²⁹.

Según se desprende del comunicado, el asesinato de Aramburu fue perpetrado por quienes deseaban destruir la “unidad nacional”, atentando violentamente contra la ciudadanía y la institucionalidad del régimen militar. Para salvaguardar la integridad política, el gobierno militar apeló a los valores inmanentes de la sociedad argentina, enfatizando la “unidad patriótica”, un recurso simbólico que los militares apelaban en tiempos de guerra para encolumnar a la ciudadanía. Para sostener dicho discurso, los militares utilizaron un tono moralizante, presentando el asesinato de Aramburu como un hecho atroz, desmedido y aborrecible, que atentó contra los valores cívicos y cristianos que encarnaban a la Patria misma. Como sostiene la socióloga Heredia, las dictaduras argentinas de raigambre liberal-conservador, subsumieron la unidad nacional “a algún principio superior tal como la patria, la tradición o el bien común” en tiempos de crisis (Heredia, 2001, p. 92). Además, como señalan Garaño y Portoriero (2012) dichos valores patrióticos se enmarcan en un ideal de sacrificio castrense, con el cual se les exigía a los militares entregar su vida a la Nación.

Schenquer y Cañada (2020) sostienen que la muerte de Aramburu inauguró el martirologio de los militares caídos frente a la subversión, el “enemigo” de la Nación al cual había que combatir (p. 4). En este marco, las FFAA operaron bajo la convicción de que el sacrificio por la patria constituía un camino de redención personal, el cual debía ser reconocido y emulado por el resto de la

²⁸ LP, 18-07-1970, portada

²⁹ LP, 18-07-1970, p. 10

sociedad. Por ello, para poder enlutar a toda la sociedad e integrarla moralmente en una comunidad nacional, fue necesario presentar a Aramburu como un héroe cívico que murió como un mártir. El historiador israelí Ben Amos (2000), quien estudió los rituales funerarios de la Francia republicana, denomina “festividad cívica” a esta fase del funeral, un ritual público promovido y gestionado por el Estado para integrar la sociedad y sostener el poder (pp. 51, 53). Para alcanzar dicha integración, los militares necesitaron marginar del ritual a los adversarios políticos, en especial a los peronistas, estableciendo una barrera ideológica de exclusión política. Como señala Ben Amos (2000), “el duelo por un héroe que ha sufrido una muerte violenta, sacrificándose por una causa, también puede convertirse en un trampolín para un poderoso festival de exclusión”³⁰ (p. 29). Mediante esta intervención simbólica los militares se constituyeron en una comunidad de “dolientes”, presentándose como los baluartes de la república y la libertad, ungiendo a Aramburu como su mártir, frente a esos otros excluidos moral y políticamente, que representaban a la subversión y por extensión al peronismo.

El presidente de facto el general Roberto Levingston, caracterizando a Aramburu como una especie de héroe militar y mártir cívico, que entregó su vida al servicio de la Nación, dijo:

El teniente general Aramburu ha sido asesinado por un grupo de individuos a quienes solo mueven el odio y la destrucción. Una vida entregada al servicio del país, una vocación completa y madurada en el quehacer público y la reflexión, una conducta ajustada a principios, ha sido segada por voluntades morbosas ejecutoras de designios apátridas. [La Nación] se agravia, porque siente que la sangre que ha corrido nos salpica a todos con su carga de reproche³¹.

En este comunicado, el gobierno militar caracterizó moralmente a los asesinos de Aramburu como agentes del odio y la destrucción, guiados por la morbosidad y motivados por sentimientos apátridas. La “sangre derramada” fue un recurso simbólico utilizado por los militares para denunciar que los violentos habían asesinado a alguien “inocente” y que toda la ciudadanía era, en mayor o menor medida, por acción u omisión, responsable por ello. Desde la lógica castrense, aquella sangre derramada los había metafóricamente salpicado, implicándolos e interpellándolos para ajusticiar a los criminales. Además, este recurso simbólico funcionó a modo de advertencia, al decirle al pueblo que, si no se detenía aquella amenaza subversiva, terminaría extendiendo su reguero de sangre a todo el país, convirtiendo a todos en potenciales víctimas. Para ello, en su ethos discursivo, Levingston presenta a los militares como los baluartes de la institucionalidad y como representantes de la Nación, resaltando los principios de servicio al país de

³⁰ Traducción propia.

³¹ LP, 17-07-1970, portada

Aramburu. Esto se extendió a toda la institución militar. En este aspecto serían las FFAA quienes defenderían la civilidad y la vida de los argentinos. Esta intervención simbólica permitió a los militares crear un límite moral entre quienes persiguen los ideales republicanos y aquellos que intentan destruirlos. Con ello se creó una jerarquía moral en donde los militares estaban en la cima, como guardianes de la República, y por debajo los extremistas, terroristas y subversivos que atentaban contra ella.

Las jerarquías funerarias

El velatorio se realizó en la capilla de las Hermanas Esclavas, a pedido de la propia familia Aramburu. El gobierno nacional había ofrecido el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para realizar el velatorio allí, una costumbre funeraria que se remonta a principios de siglo XX (Gayol, 2012). Sin embargo la familia Aramburu declinó el ofrecimiento, alegando “razones espirituales”, ya que aquella iglesia era donde concurrían semanalmente a misa³². Como observa Gayol (2012), en ocasiones sucede que en los funerales de Estado la familia del muerto conserva el poder de decisión sobre el ritual y el cadáver. Por tal motivo la iglesia fue acondicionada rápidamente para recibir los restos de Pedro Aramburu, colocándose cirios en la capilla ardiente y una corona de flores enviada por el presidente Levingston. De este modo los familiares buscaron restituir la sacralidad y la dignidad de Pedro Aramburu, velando su cuerpo en un espacio sagrado.

El personal policial de la Coordinación Federal, a cargo del comisario inspector Ricardo Sánchez, organizó la seguridad de la capilla, impidiendo el acceso a periodistas y particulares. Las inmediaciones del edificio fueron acordonadas y en las calles hubo gran presencia policial. La capilla ardiente estuvo custodiada por cadetes del Colegio Militar de la Nación, de la Escuela Naval Militar y de la Escuela de Aviación Militar. Entre tanto, una guardia de honor de Granaderos a Caballo fue apostada a ambos lados del altar, reforzando el vínculo patriótico y el martirologio del ex presidente provisional con la Nación. Esta tradición castrense se remonta a fines del siglo XIX cuando los restos del general San Martín fueron repatriados en 1880 y custodiados por los Granaderos (Bragoni, 2022). Por otra parte, los granaderos desempeñaron un rol protocolar fundamental en los rituales funerarios de Estado a comienzos de siglo XX, protegiendo los restos de los ex mandatarios (Gayol, 2012). De esta forma, mediante este ceremonial simbólico, los militares legitimaron a Aramburu elevándolo a un héroe nacional e invistiéndolo de un aura republicana.

Los primeros en llegar fueron el cardenal Antonio Caggiano (arzobispo de Buenos Aires) y el general Juan Carlos De Marchi, quienes asistieron a misa mientras se acondicionaba la capilla ardiente. Luego el cardenal Caggiano

³² LP, 18-07-1970, portada.

recibió a la familia Aramburu a la entrada de la iglesia, confortándola y consolándola en el dolor. Los familiares, amigos y colaboradores de Aramburu transportaron el féretro a pulso al interior de la capilla, envuelto con la bandera nacional cruzada por un crespón negro en señal de luto. Por medio de este mecanismo de enlutamiento el muerto es introducido al panteón nacional, conectándolo simbólicamente con los héroes patrios y estableciendo la “unidad en el dolor”. El luto, como sostiene el antropólogo Louis-Vincent Thomas (1991), es un ritual social que codifica, impone, reglamenta el dolor (p. 121). En tanto ritual político, el luto por la muerte de Aramburu buscó imponer un consenso emocional y una narrativa heroica, al fusionar al héroe con la Nación. Esta narrativa codificó a Aramburu como un patriota y un mártir, quien con sus valores e ideales cristianos y liberales encarnó el cuerpo social, herido por la traición. De este modo se constituyó una “comunidad de dolientes”, con sus reglamentos, protocolos y jerarquías específicas.

En la primera fila, dentro del presbítero de la capilla, se ubicaron los familiares de Aramburu acompañados por autoridades castrenses y eclesiásticas. Estos estaban separados del resto del público por una reja, que cumplió un doble efecto, tanto material como simbólico. Por un lado, ésta garantizó la seguridad del féretro, de la familia de Aramburu y del alto mando militar y eclesiástico, ante el temor de un atentado. Esto era una posibilidad que la Policía Federal consideró a lo largo del funeral, controlando los bolsos y paquetes de toda aquella persona que ingresara al templo. Pero, por otro lado, aquella reja fue una barrera simbólica que diferenció al grupo de dolientes, estableciendo una jerarquía moral y emocional. La familia de Aramburu y las autoridades castrenses y eclesiásticas representaron el primer nivel de dolientes, vinculados al fallecido por lazos de parentesco y camaradería respectivamente. Este grupo ejerció la “presidencia del duelo”, con ciertos atributos y responsabilidades, como guiar la conducta de luto y duelo del resto de los concurrentes, y marcar el ritmo de la aflicción y las lamentaciones.

Como ocurre en otros funerales de Estado, las cúpulas de gobierno y eclesiásticas suelen acompañar y apoyar a la familia del difunto durante el proceso de duelo. Pero en el caso de Aramburu, las autoridades del gobierno militar, en especial el ala liberal, adquirieron protagonismo asumiendo el status ritual que les corresponde a los familiares sanguíneos (los deudos). Es el caso de Lanusse, quien compungido y absorto, dirigió el ritual funerario con las mismas atribuciones que un hijo o un familiar directo del difunto, organizando el ritual, recibiendo condolencias y cerrando el discurso fúnebre. Como señala el propio Lanusse (1977) en sus memorias, Aramburu era más que un líder político, era su mentor, amigo y una figura paternal. Además, Lanusse se consideraba, en cierta medida, un continuador del proyecto político inaugurado por Aramburu, pugnando por una salida democrática al régimen. Era, en un sentido metafórico, su heredero político. Por otra parte, la

presencia de autoridades militares durante el funeral reforzó la idea que, a pesar de sus diferencias ideológicas (liberales y nacionalistas), dentro de las FFAA operó un “espíritu de cuerpo”, en donde la lealtad, la reciprocidad y la solidaridad se transforman en los principios reguladores. En tanto cuerpo organizado, los militares también fueron parte de los dolientes. En este aspecto, en un contexto de violencia política y social en aumento, el asesinato de Aramburu “pareció confirmarle al actor castrense la peligrosidad de la amenaza que se cernía sobre los hombres de armas” (Garaño & Pontoriero, 2018, p. 6).

En un segundo nivel encontramos a los amigos y conocidos del ex presidente, quienes acompañaron a la familia en su dolor y pedidos de justicia. Ellos asistieron emocionalmente a los familiares de Aramburu, auxiliándolos en la “presidencia del duelo”. Entre ellos estaba el almirante Isaac Rojas, el coronel Aldo Molinari, el coronel Montiel Forzano, el general de división Federico Toranzo Montero, el general Bernardino Labayrú, el doctor Horario Theddy y el doctor Atilio Dell’ Oro Maini. Posteriormente harían lo mismo el almirante Pedro Gnavi (comandante en jefe de la Armada), el brigadier Eduardo McLouhglin (ministro del Interior), el doctor José Cáceres Monié (ministro de Defensa), el general de brigada Luis Leguizamón Martínez y el ministro de Bienestar Social, el señor Francisco Manrique. Además, durante el funeral hubo comandos civiles, al mando de Molinari, protegiendo las entradas de la iglesia, actuando como una guardia de honor. Estos eran ciudadanos armados que reivindicaban los ideales antipopulistas de la “revolución libertadora”; un frente heterogéneo donde convivían elementos del nacionalismo integrista y los sectores más duros del liberalismo militar. Cuando el general Mario Fonseca, ex jefe de la Policía Federal responsable del operativo que buscó a Aramburu, ingresó a la iglesia, fue insultado y echado del recinto por los comandos civiles, quienes lo responsabilizaron por no haber encontrado a tiempo al ex presidente. Otro que tampoco fue bien recibido por los dolientes fue el ex presidente democrático Arturo Frondizi, quien fue insultado, golpeado y amenazado por los seguidores de Aramburu.

El siguiente nivel estuvo constituido por el público en general, quienes se acercaron a las inmediaciones de la iglesia para presenciar el ritual y acompañar a la familia en su dolor. Sin embargo, el principal motivo por el cual el público asistió al funeral fue para repudiar el crimen, independientemente de la afinidad ideológica que tuvieran con el fallecido³³. Aquel público diverso en clase y origen, no guardaba una relación de parentesco, amistad o camaradería con los deudos y con Aramburu, como si la tenían el resto de los dolientes. Por el contrario, muchos se presentaron solidarizándose con la familia para manifestar su repudio al crimen, estableciendo un vínculo moral con el fallecido. El público estuvo presente en las inmediaciones de la iglesia, a pesar de la lluvia, a la espera de ingresar y

³³ Pe, n°44, 21-07-19/70, p. 20.

despedir al líder político. Mientras que los comandos civiles custodiaban el interior de la capilla, la Policía Federal controlaba los accesos viales. Además de impedir el ingreso del público, la policía mantuvo acordonados a los periodistas y camarógrafos mediante una valla metálica, luego de que algunos de ellos intentaran instalarse en el atrio. Al respecto, el subcomisario Rivera, encargado de la seguridad interna expresó: “por una expresa disposición no se permitía [sic] el ingreso del peronismo”³⁴. Luego, gracias a la intervención de Francisco Manrique, se le permitió a un grupo de cronistas ingresar al templo, quienes tomaron fotografías, aunque no pudieron entrevistar a los invitados allí presentes.

Por la tarde, cuando la familia de Aramburu se retiró de la capilla ardiente a descansar en el piso superior del convento de las Hermanas Esclavas, se le permitió al público ingresar al recinto por uno de los accesos laterales. En el frente principal de la iglesia fueron colocadas coronas de flores, enviadas por instituciones civiles, delegaciones extranjeras y particulares. El presidente de la Nación, el general Roberto Levingston, y su esposa Betty Nelly Andrés, fueron al velatorio al atardecer. Estuvieron unos minutos frente al féretro de Aramburu y luego dieron su pésame a la viuda y sus hijos. Pocos minutos después se retiraron de la iglesia, guardando el perfil bajo. Al anochecer también asistieron al velatorio el brigadier general Carlos Alberto Rey y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Eduardo Ortiz Basualdo. Luego, ya entrada la noche, el número de visitantes aumentó considerablemente, lo que impidió a la policía despejar las entradas al templo. En esos momentos ingresaron algunos colaboradores, amigos cercanos y distintas figuras del país quienes se integraron al resto de los dolientes allí presentes. Fue entonces en donde los tres niveles de dolientes se congregaron, constituyendo una asociación intensa de personas que comparten un mismo dolor y pesar, en una “comunidad moral”.

Esta “comunidad de dolientes” estaba integrada por lazos institucionales, emocionales e ideológicos. Esta integración era moral y política, motivada e inspirada en los ideales de Aramburu, lo que le permitió a dicha comunidad diferenciarse discursivamente de sus opositores —entre ellos los grupos nacionalistas vinculados a Onganía³⁵, los comunistas y el peronismo— a quienes se sospechaba del crimen. Aunque la familia de Aramburu, el general Lanusse y los seguidores de Aramburu no sabían ciertamente quienes habían cometido el crimen, todo partido político o agrupación social era sospechosa. Este clima de conspiración afectó directamente el desarrollo del funeral, dado el temor a que se produjeran atentados en la iglesia e intermediaciones, y que este se convirtiera en un campo de batalla ideológica, entre los distintos

³⁴ LP, 19-07-1970, portada.

³⁵ Si bien los comandos civiles de 1955 compartían con los nacionalistas ciertos rasgos católicos y reaccionarios, en el discurso de la comunidad de dolientes fueron diferenciados: los primeros como aliados durante la Revolución Libertadora y los segundos como opositores sospechosos del crimen.

bandos que pugnaban por el poder en Argentina (por ello Frondizi y Fonseca fueron echados del recinto sagrado). En este sentido, los medios gráficos que cubrieron el ritual funerario alimentaron esa sospecha, generando un efecto psicológico de incertidumbre, polarizando a la sociedad argentina entre quienes lamentaron el trágico hecho y quienes, al menos no públicamente, lo apoyaron. Ante la afrenta ocurrida, los dolientes buscaban restituir el orden moral y simbólico, sea por la justicia o por la venganza.

Para dar sostén a dicho orden, el gobierno militar optó por la justicia como elemento moralizante y no a la venganza, estableciéndose como árbitro imparcial. El capitán Molinari dijo al respecto, cuando fue entrevistado durante el velatorio: “nosotros no tenemos el ánimo de venganza, porque si no estaríamos desvirtuando la obra de Aramburu. Nosotros queremos que haya justicia”³⁶. Así, fue la justicia y no la venganza, lo que animó y resignificó el ritual funerario.

Por su parte, el sacerdote Iñaki de Aspiazu pronunció una oración fúnebre, invocando la unidad y la paz nacional.

Señor; dad eterno descanso al alma de Pedro Eugenio Aramburu; Señor, dad fortaleza y mantén en la actitud ejemplar que ante el país han ostentado hasta ahora su digna esposa y sus hijos. Señor, quita del corazón de todos los argentinos todo sentimiento de odio y de revancha; haz que esta vida que se apaga se convierta en luz para enseñar el camino de la paz. Que esta muerte nos enseñe a vivir en paz³⁷.

La invocación de la justicia como recurso simbólico y discursivo, permitió diferenciar moralmente a quienes defendían la República y quienes atentaban contra ella. Mediante este recurso se fomentó la “figura del ciudadano activo” con el cual los ciudadanos pudieran identificarse (Ben Amos, 2000, p. 388), promoviendo el arquetipo de argentino comprometido con la causa nacional. La exaltación de Aramburu funcionó, en última instancia, como una reivindicación del prestigio castrense. En este aspecto fue importante el rol que desempeñó Lanusse, quien fue el primero en rendir los honores militares frente al féretro, incluso antes que lo hicieran Sara Herrera y los hijos del difunto. Bajo este dispositivo Aramburu fue simbólicamente reapropiado por los militares, por encima de los deseos y responsabilidades familiares, reclamando para sí una exclusividad corporativa sobre su legado que solo incluía a la institución castrense y a sus partidarios. De este modo el cuerpo de Aramburu se convertía en un artefacto político, que proveía al estamento militar la legitimidad necesaria para tutelar el orden público. Luego de este acto, rindieron los honores militares las personas pertenecientes al segundo nivel de dolientes y finalmente el público en general.

³⁶ LP, 18-07-1970, p. 12

³⁷ LP, 18-07-1970, p. 8

El día 18 de julio se realizó una última misa a cuerpo presente, oficiada por el cardenal Caggiano. Luego el féretro fue llevado en cortejo fúnebre hacia el Cementerio de La Recoleta. Este cortejo estaba compuesto por dieciséis automóviles, dos jeeps, dos camiones militares (que transportaban los cadetes y oficiales de las tres Fuerzas militares), escuadrones de Granaderos a Caballo, la banda militar y un jeep con soldados del Regimiento 1 de Infantería de Patricios. En la cureña que transportó el féretro se encontraban Eugenio Aramburu, Carlos Aramburu, el almirante Rojas, el teniente general Lanusse y otros amigos personales del ex presidente. Por detrás de estos, acompañaba el cortejo fúnebre el presidente de la Nación Roberto Levingston, su esposa y otros funcionarios.

El entierro

Por la mañana, una multitud estuvo esperando en silencio la llegada del cortejo a las puertas del cementerio de La Recoleta. En su trayecto, el público saludaba al féretro con pañuelos blancos mientras que desde los balcones y desde la acera se arrojaban flores hacia la cureña. Las calles estaban adornadas por banderas nacionales con un crespón negro en señal de luto. Según el periódico *La Prensa*, cuando el cortejo llegó al cementerio, las personas se agolparon entre lamentos y aflicciones, bajo una intensa y continua lluvia, buscando acercarse y despedir a su líder. Mientras tanto, aviones de combate circundaban el cielo y se realizaban cañonazos de salva en honor al difunto. Las personas se concentraron sobre el peristilo del cementerio, el cual tuvo que ser desalojado ya que allí se colocaría el estrado reservado para los familiares de Aramburu y altas jerarquías militares y eclesiásticas. Cuando el cortejo fúnebre arribó al cementerio, el féretro fue colocado en un catafalco custodiado por agentes de la Policía Militar. El monseñor Aramburu rezó un responso y dio lugar a los discursos. En ese contexto “el silencio, la inmovilidad, y las lágrimas contenidas (...) acompañaron las oraciones fúnebres”³⁸.

El primero en tomar la palabra fue el almirante Isaac Rojas, quien en un extenso discurso fúnebre celebró la vida de Aramburu, cuando ambos lideraron la “revolución libertadora”. En este aspecto, el ex vicepresidente provisional realizó una analogía entre el clima de violencia previo a 1955 y lo ocurrido en 1970. Rojas también denunció el crimen de Aramburu, haciendo una lectura e interpretación de lo ocurrido. Entre otras palabras, el almirante dijo:

Un crimen atroz, inexplicable, le ha quitado a uno de sus hijos eminentes, arrojado sobre su historia una nueva mancha sangrienta y vergonzosa (...) Los brazos que ejecutaron el abominable asesinato y los cerebros que lo impulsaron intelectual y espiritualmente no se encuentran entre la argentinidad sensible, entre la inmensa mayoría paciente y silenciosa que

³⁸ LP, 19-07-1970, p. 11

ama la paz. Aquellos, marginados de las leyes de Dios y de los hombres, son los mensajeros del caos, los epígonos de la violencia fratricida, los que a todo trance se esfuerzan por cegar los cauces que conducen a la concordia nacional.

Luego, a modo de advertencia para toda la sociedad, Rojas calificó a la subversión como “agentes de la desintegración” nacional, cuyo accionar amenazaba la unidad política y moral del país. Rojas entendía que el país se encontraba en un periodo de transición hacia la paz (iniciado en 1955 con la “revolución libertadora”), y que este era el anhelo de toda la sociedad argentina. El intento de Aramburu de alcanzar un acuerdo con las distintas fuerzas políticas, ya en 1970, lo ubicó como un paladín de la paz nacional y el consenso social. Aquella era la figura que los militares liberales reivindicaban como propia. Por otra parte, aquella paz fue definida como una esencia intrínseca e inalienable de la “argentinidad”, enaltecida por la figura de Dios. Aquellos que estaban en contra de ella, no solo no dejaban de ser argentinos, sino que estaban simbólicamente excomulgados de la comunidad de Dios. Esto establecía un límite moral, legitimando a los militares en su accionar, marginando a sus enemigos. Además, para Rojas, el asesinato de Aramburu no solo fue un acto revanchista que revirtió el proceso de paz nacional instaurando el miedo, el caos y la violencia, sino que también fue un ataque a la identidad, intereses, valores y creencias de los argentinos.

El segundo en tomar la palabra fue el general Bernardino Labayrú, quien, en representación de los amigos de Aramburu, dio un discurso emotivo recuperando el valor humano de su amigo, a quien recordó como una persona con valores y principios morales y patrióticos. Labayrú, a diferencia del tono sacrificial de Rojas, dijo:

Ha caído una de las grandes figuras de la nacionalidad, se ha ido un varón sin tachas, un soldado ejemplar, un ciudadano fiel a nuestras grandes tradiciones. Sentimos que el país entero nos acompaña y que las banderas que el eminente ciudadano enarbolara siguen al tope (...) Si la venganza fue el móvil que armó manos alevés, a nosotros nos determina el bien permanente de la Nación, el anhelo de la concordia definitiva (...) Es que el teniente general Aramburu no pertenecía a ningún sector en particular. Era un ciudadano de la república toda (...) un símbolo de esta América nuestra.

Para Labayrú, Aramburu encarnaba los atributos del soldado y el ciudadano comprometido moralmente con sus semejantes. En su alocución se enaltecía la figura más humana del General; además, sus palabras fueron un llamado a la unidad, hermandad y entendimiento nacional, un mensaje esperanzador para alcanzar la concordia. Para ello Labayrú recuperó al Aramburu del Gran Acuerdo Nacional³⁹, como el único capaz de alcanzar la integración nacional,

³⁹ El Gran Acuerdo Nacional (GAN) fue la propuesta política lanzada en 1971 por el General Lanusse, para negociar una salida electoral tras el fracaso del proyecto corporativista del General Juan Carlos Onganía (1966-1970). El GAN buscaba condicionar el retorno a la democracia mediante un pacto entre las fuerzas políticas y militares que garantizara la unidad nacional y controlara la influencia del peronismo.

tanto en vida como en su muerte. En su optimismo, Labayrú pretendió que el magnicidio fuera un llamado a la conciencia de toda la sociedad argentina, para constituir una *República*. Desde su perspectiva, Aramburu podría convertirse en un faro que lograría iluminar a toda la Nación. En este aspecto, tanto Labayrú como Rojas entendieron que la figura de Aramburu podría representar la unidad nacional.

Por último, en nombre del Poder Ejecutivo, la Junta de Comandantes y las FFAA, el general Lanusse cerró el funeral con un elocuente discurso. El hecho que Lanusse hablara en representación del Poder Ejecutivo en lugar de Levingston, en calidad de presidente de la Nación en funciones, resulta significativo en aquel contexto político. Mientras que Levingston no tenía un poder político real dentro de las esferas militares y era considerado por la Junta de Comandantes como un presidente de transición, Lanusse contaba con gran aceptación, apoyo e influencia en el círculo castrense (Gomes & Seitz, 2019). Por otra parte, la sociedad en general veía en Levingston un partidario y continuador de las políticas de Onganía, mientras que Lanusse era identificado con el sector liberal dentro de las FFAA, alguien que pugnaba por una apertura democrática. Para Lanusse, el martirologio de Aramburu permitiría una transición democrática. En su discurso dijo:

Debo cumplir hoy la dolorosa misión de despedir los restos del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, cruelmente inmolado por el odio ciego e irracional de un grupo de individuos cuya sola existencia constituye una afrenta para la dignidad e hidalguía del pueblo argentino (...) Arquetipo de hombre y de soldado, su vida se caracterizó por el ejercicio constante de una vocación al servicio del país y la libertad de sus conciudadanos (...) Por este motivo, fue elegido por los agentes del caos y la violencia, como la víctima propiciatoria que debían sacrificar en holocausto de ideologías y procedimientos reñidos con los más elementales principios de humanidad (...) Que su muerte sirva fundamentalmente a sellar de manera definitiva la unión de nuestro pueblo en la gran empresa común que la Nación espera de sus hijos y a desenmascarar de una vez por todas, a los grupos criminales (...) Mi general; vuestro colaborador y subordinado de ayer, vuestro amigo, el hoy comandante en jefe de vuestro querido Ejército, os despide haciendo publica su convicción.

Lanusse caracterizó a Aramburu como un héroe, elevándolo por encima de todos los mortales, alguien que entregó su vida al pueblo argentino, en pos de su libertad y bienestar. Lanusse definió el martirologio de Aramburu, en términos de "holocausto", es decir de sacrificio por el país. Para éste, Aramburu se constituyó en un ejemplo moral que enseñaría a la sociedad las virtudes de un ciudadano. Dichas virtudes debían ser el horizonte moral a seguir por todo argentino. Por otra parte, Lanusse describió a los asesinos del ex presidente como quienes "pretenden mediante el terror, hundir a la República en el caos y la frustración"⁴⁰. Ese enemigo de la Nación, de la civilización y de la humanidad, es construido por Lanusse como el

⁴⁰ LP, 19-07-1970, p. 11

antagonista de Aramburu, cuya humanidad, heroicidad y valentía se fusiona con la propia Argentina. De este modo, la figura de Aramburu integra a una sociedad argentina pacífica y excluye a esos otros violentos que desean la destrucción del país. En este aspecto, los asesinos de Aramburu no solo fueron demonizados, sino también barbarizados como agentes de la anarquía.

Luego que los oradores terminaron sus respectivos discursos fúnebres, el asistente personal de Aramburu, el abogado Héctor Sandler, quien se desempeñaba como secretario de Udelpa, le solicitó a la viuda del ex mandatario que le permitiera pronunciar un discurso. Sara Herrera aceptó la solicitud, pero al momento de ascender a la tribuna, Sandler fue detenido por un oficial del Ejército bajo la orden directa del presidente Levingston, quien ante la insistencia del abogado le respondió "con el respeto que me merece la señora del teniente general Aramburu, tan cruelmente inmolado, le pido que deponga su actitud"⁴¹. Tras finalizar el funeral, Sandler manifestó su malestar por habersele prohibido dar su discurso fúnebre, el cual estaba centrado en la figura de un Aramburu conciliador. En una entrevista *Panorama* Sandler dijo en forma de homenaje póstumo:

Aramburu comprendió que todo el prestigio ganado de nada servía si no lo colocaba al servicio social y político del país. Fue ese Aramburu del llano el que descubrió que la única salida de toda política es la gran conciliación nacional, que para hacer posible esa conciliación había que renovar las viejas estructuras (...)⁴².

Su exclusión en el discurso exequial, pone en evidencia el proceso de apropiación simbólica de los militares. Así, si bien Aramburu fue presentado como un mártir cívico, no dejaba de ser en esencia un militar, parte del cuerpo castrense.

Luego, por parlante, se anunció que los discursos autorizados por la familia habían sido ya pronunciados, finalizando así el servicio funerario con el correspondiente toque de la corneta del Regimiento de Granaderos, guardándose el silencio en señal de respeto y duelo. Entre sollozos y lágrimas el féretro fue sepultado en la bóveda de la familia Sciurano Castañeda, propiedad del empresario y político radical Adolfo Sciurano Castañeda, allegado a la familia Aramburu. Luego el público concurrente se retiró del cementerio, en su mayoría detrás del automóvil del almirante Rojas entonando la Marcha de la Libertad. Así, el funeral concluyó con una puesta en escena en donde el duelo y la solemnidad reforzaron la construcción de un legado político.

⁴¹ RP, 27-07-1970, p. 11.

⁴² RP, 27-07-1970, p. 11.

Conclusiones

El análisis del funeral del general Pedro Aramburu permite comprender cómo los rituales fúnebres pueden ser utilizados como herramientas de construcción política y legitimación del poder. A través del estudio de los discursos de Lanusse, Labayrú y Rojas, se evidencia cómo los militares buscaron consolidar una jerarquía moral, elevando a Aramburu a la categoría de mártir, deshumanizando a sus asesinos y excluyéndolos de la comunidad nacional. Este proceso no solo reforzó el espíritu de cuerpo dentro de las FFAA y su identidad frente a la sociedad civil, sino que también contribuyó a la construcción de un enemigo interno que justificara la represión. A través del cuerpo sacralizado del difunto, el Estado militar consolidó su hegemonía, inscribiendo su muerte en una narrativa de sacrificio con el cual disciplinar a la sociedad. Mediante este ritual se replanteó una reconfiguración del orden político, estableciendo un dominio simbólico sobre la memoria nacional.

Más allá del hecho histórico, este estudio invita a reflexionar sobre la función política de los funerales de Estado en la Argentina y su capacidad de estructurar narrativas oficiales. En el caso de Aramburu se evidencia que dichos rituales no sólo buscaron la integración social, sino que también sirvieron como dispositivos de exclusión, marginando a sectores sociales. En este sentido, este funeral permitió a los sectores liberales, tanto civiles como militares, alinearse en torno a la figura del ex presidente, en un contexto de fragmentación política. Al explorar estas dinámicas, se contribuyó a una comprensión más profunda de cómo los discursos y los rituales funerarios estructuran el poder y su legitimidad en una sociedad en crisis. El funeral de Aramburu reveló cómo la muerte puede ser instrumentalizada para consolidar el poder, apelando al imaginario nacional y a la sensibilidad del público en general.

Bibliografía

Anzorena, O. (1998). *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976)*. Ediciones del Pensamiento Nacional.

Bello Reguera, G. (2008). De la demonización al racismo (sobre la deshumanización del otro). *Criterio Jurídico*, 8(2), 9–24. <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/942/797>

Ben Amos, A. (2000). *Funerals, politics, and memory in modern France 1789–1996*. Oxford University Press.

Bragoni, B. (2022). Los juegos de la memoria: los usos públicos de San Martín en las liturgias estatales argentinas (siglos XX y XXI). *Caravelle*, 118, 13–26. <https://doi.org/10.4000/caravelle.12178>

Fernández Alvario, P. (1974). *Argentina Z: El crimen del siglo*. Próspero Germán Fernández Alvario.

Garaño, S., & Pontoriero, E. (2018). "Esta sangre es inmensamente fecunda". Un análisis de los funerales de los militares "caídos" en la llamada "lucha contra la subversión" (1973–1974). *Quinto Sol*, 22(2), 1–23. <https://doi.org/10.19137/qs.v22i2.1334>

- Gayol, S. (2012). La celebración de los grandes hombres: funerales gloriosos y carreras post mortem en Argentina. *Quinto Sol*, 16(2), 1–29. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/525/501>
- Gayol, S. (2014). Ritual fúnebre y movilización política en la Argentina de los años treinta. *PolHis*, 6(12), 225–243. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/28642>
- Gayol, S. (2018). La unanimidad de la congoja: la muerte de Eva Perón en 1952. En S. Gayol & S. Palermo (Eds.). *Política y cultura de masas en la Argentina de la primera mitad del siglo XX* (pp. 289–314). Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Gillespie, R. (1987). *Soldados de Perón. Los montoneros*. Grijalbo.
- Gomes, G., & Seitz, A. (2019). Las revueltas populares y el tiempo social en la búsqueda de construcción de consensos en la autodenominada “Revolución Argentina”. *Revista de Historia*, 20, 60–79. <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index>
- Gordillo, M. (Comp.). (2019). *1969. A cincuenta años: repensando el ciclo de protestas*. CLACSO.
- Heredia, M. (2001). La identificación del enemigo. La ideología liberal conservadora frente a los conflictos sociales y políticos en los años sesenta. *Sociohistórica*, 8, 83–120. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2893/pr.2893.pdf
- Lanusse, A. (1977). *Mi testimonio*. Lasserre Editores.
- Larraquy, M. (2010). *De Perón a Montoneros. Historia de la violencia política en la Argentina: Marcados a fuego II (1945–1973)*. Aguilar.
- Lenci, L. (2021). Justicia, política y violencia. Normas, teorías y prácticas de Montoneros, 1972–1976. En J. Cernadas & L. Lenci (Coords.). *Futuros en pugna: Protagonismos, dinámicas y sentidos durante el tercer gobierno peronista (1973–1976)* (pp. 405–455). Universidad Nacional de La Plata. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.5093/pm.5093.pdf>
- Míguez, M. C. (2013). ¿Anticomunistas, antiestatistas, antiperonistas? La “nacionalización” de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966. *Revista SAAP*, 7(1), 66–95.
- Otero, R. (2019). *Montoneros y la memoria del peronismo: símbolos, líderes, actores*. Prometeo Libros.
- Reynoso, P. (2013). *Montoneros y católicos*. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. <https://www.aacademica.org/000-010/826>
- Salas, E. (2005). El falso enigma del “Caso Aramburu”. *Lucha Armada en la Argentina*, 2, 62–71. <https://americalee2.cedinci.org/wp-content/uploads/2019/03/LUCHA-ARMADA-02.pdf>
- Sanz, V. (2006). Dolor colectivo, funerales públicos. Ritos funerarios y política de Estado en las exequias a Eva Duarte de Perón a través de la prensa escrita. *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, 5, 125–140.
- Sarlo, B. (2003). *La pasión y la excepción*. Siglo XXI Editores.
- Schenquer, L., & Cañada, L. (2020). Monumentos, marcas y homenajes: la última dictadura, los usos del pasado y la construcción de narrativas autolegitimantes (Buenos Aires, 1979–1980). *Quinto Sol*, 24(2), 1–20. <https://doi.org/10.19137/qs.v24i2.3797>
- Spinelli, M. E. (2005). La “Revolución Libertadora”. Una ilusión antiperonista. *Prohistoria*, 9, 185–189. <https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135835010.pdf>
- Thomas, L.-V. (1991). *La muerte. Una lectura cultural*. Paidós.